

Colombia y Venezuela tienen un largo camino por recorrer en la frontera

Lo que hay después del encuentro

Jesús Rodríguez Villarroel, s.j.*



Desde hace un año la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana Binacional es una realidad. Varias organizaciones construyen una visión más moderna y democrática a ambos lados de una frontera históricamente conflictiva. He aquí un recuento de los traumas que dejó un conflicto entre presidentes y lo que dejó abierto el encuentro Chávez-Santos en Santa Marta

La frontera no la trazan los gobiernos, sino que se define por las interacciones de quienes habitan en ella. Venezuela y Colombia comparten 2 mil 219 kilómetros de frontera conformados territorialmente por siete departamentos y 43 municipios colombianos, y cuatro estados y veinte municipios venezolanos que sirven de límite para las relaciones de ambos países hermanos, caracterizadas por un intenso intercambio de bienes y servicios enmarcados, algunas veces, dentro de las políticas de los gobiernos nacionales hacia la integración y la apertura, y otras veces, desafiando la voluntad de los gobiernos, en una expresión de las necesidades sentidas, en uno y otro país, especialmente de quienes habitan la franja fronteriza.

En efecto, la extensa frontera ha permitido que ambas naciones hermanas establezcan una densa y compleja relación. Sus habitantes han transitado momentos de encuentro y desencuentro; sin embargo, esta larga historia no ha logrado que se asocien para construir políticas de vecindad a corto, mediano y largo plazo y tampoco ha favorecido los espacios para que haya una articulación duradera entre los diversos sectores que dinamizan la zona fronteriza.

Pese a la vecindad entre ambas naciones, el flujo de incidentes en la frontera colombo/venezolana siempre ha estado presente en la historia de sus relaciones; pero la primera década del siglo XXI estos sucesos han estado afectados por la coyuntura crítica de cada país, las respectivas acciones gubernamentales para hacerles frente y las divergencias políticas entre los gobiernos centrales de Bogotá y Caracas. Es así que entre 1999 y el 7 de agosto de 2010, los mandatarios Álvaro Uribe y Hugo Chávez alimentaron una crisis binacional. Cada gobierno atribuía al otro la causa de los males en la frontera, haciendo de la diatriba una herramienta para fines partidarios y políticos.

Estas diferencias entre los gobiernos centrales de Venezuela y Colombia se hicieron sentir en la población fronteriza que tuvo que pagar, y sigue pagando, los costos humanos, políticos, económicos, sociales, psicológicos, culturales y ambientales con el crecimiento de problemas transfronterizos como el contrabando y la presencia interventora y amenazante de grupos armados irregulares.

Uno de los costos más visibles que tuvo que pagar el país y sus habitantes, producto del desentendimiento entre ambos mandatarios, fue el económico. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, para el año 2008, superaba los siete mil millones de dólares anuales: fue el segundo socio comercial para ese año. Con la ruptura de las relaciones diplomáticas, que se agravó entre julio y agosto de 2010, pasamos a menos de un mil 600 millones de dólares.

Es así que para los habitantes de la frontera, el encuentro de Santa Marta –tras la llegada de Juan Manuel Santos al poder– abrió una posibilidad en las relaciones de ambos países, porque cada uno de los mandatarios tenía la necesidad de cambiar las políticas exteriores existentes hasta el momento.

Todo ello hizo necesario un giro beneficioso para ambos. Se logró una declaración de principios para entenderse y respetarse, desde las diferencias, sin tratar de convencerse uno al otro. Ambos mandatarios establecieron un diálogo directo, antes que recurrir a la tribuna pública para denunciarse uno al otro. Comprendieron que esto puede hacer avanzar la resolución de los conflictos y las diferencias de una manera pacífica, sin afectar a los pobladores de ambos países, especialmente de los que habitan y dinamizan las fronteras y se ven afectados cuando se incrementan las diferencias entre sus gobiernos.

Santa Marta abrió el diálogo entre Bogotá y Caracas con una agenda común de cinco temas para retomar nuevamente la rienda de las relaciones de ambos países. Esta nueva agenda priorizó los siguientes aspectos:

- Pago de la deuda a los exportadores colombianos por parte del Estado venezolano.
- Diseño de un sistema para establecer reglas de juego en el comercio binacional.
- Obras de infraestructura de interés común (este tema revivió todos los proyectos fronterizos paralizados por el congelamiento: acueductos, puentes, planes energéticos; incluso los mandatarios hablaron de la salida del petróleo de Venezuela por el Pacífico).
- Proyectos sociales para el desarrollo fronterizo (los gobiernos están viendo que el tema de seguridad se puede abordar a través del desarrollo).
- Seguridad. En la reunión de la comisión de ministros de seguridad y defensa, las palabras Farc, ELN, paramilitares no aparecieron; hubo

acuerdo sobre narcotráfico, que algo tiene que ver con la guerrilla. Ambas comisiones hacen una aproximación al tema de seguridad por otras vías que no incluyen mover tropas a la franja fronteriza.

No obstante, aun cuando se recogen temas de interés, en el encuentro de Santa Marta el rostro humano de la frontera estuvo ausente. Por ejemplo, a temas como el desplazamiento, refugiados, migración, identidad, trata de personas, reclutamiento de niños –entre otros– no se les abrió un espacio en la agenda de los mandatarios. Parece que la zona es sólo comercio.

Pese a esto, con el encuentro entre ambos mandatarios nació un nuevo contexto para quienes habitamos esta extensa zona; pero es un contexto frágil porque no se ha tomado en cuenta la capacidad organizativa y propositiva de algunos actores sociales en la región.

Quienes vivimos aquí exigimos unas relaciones entre Colombia y Venezuela que no se basen en la personalización de los presidentes, sino en canales institucionales que garanticen una paz justa y duradera.

En el marco de las observaciones anteriores, desde la frontera colombo-venezolana del Alto Apure-Táchira-Arauca-Norte de Santander queremos ayudar a poner contenido a estos temas que los gobiernos han colocado en su agenda común. Está en marcha, desde hace un año, la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana Binacional, un proyecto que surge de la alianza interinstitucional que se ha ido consolidando entre dos proyectos de la Compañía de Jesús: Paz en Fronteras (correspondiente a la provincia venezolana) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)/Programa por la Paz (obra social de la provincia colombiana, articuladas a las jurisdicciones eclesíásticas de Pamplona y Cúcuta en Norte de Santander (Colombia). Es una apuesta pedagógica de formación política y ciudadana, todo ello para apoyar la creación de condiciones para la reconstrucción del tejido social.

Así se construye la posibilidad de una visión transformadora en capital cívico. Es una estrategia para dinamizar las fronteras y pensarnos juntos en un contexto más moderno, más democrático, menos regulado por la fuerza.

* Coordinador ejecutivo de la red Paz en Fronteras.